



DECLARACIÓN DE LA HABANA

Mayo 2018

El Comité Ejecutivo de Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, reunido en la ciudad de La Habana, Cuba, realiza la presente declaración considerando el momento de particular trascendencia que atraviesa nuestra región. Luego de analizar los informes realizados por las organizaciones miembros de cada país, y atendiendo a las difíciles circunstancias que enfrenta la clase trabajadora, consideramos vital plasmar una mirada común respecto a la coyuntura actual, que nos permita delinear el contexto económico, político y social ante el cual debemos posicionarnos y frente al cual estamos llamados a intervenir.

No creemos exagerar si afirmamos que el asalto global a los derechos de los trabajadores y el saqueo sin precedentes de los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente son características de un capitalismo hegemonizado por la especulación financiera que es dominante en América Latina y el Caribe.

Sin duda alguna asistimos a un cambio de época caracterizado por el ascenso de gobiernos, ya sea por triunfos electorales o golpes disfrazados, marcadamente de derecha que hacen gala de todo el repertorio neoliberal que caracterizó la década de los 90. De forma tal que las políticas de ajuste vuelven a ser parte de las propuestas gubernamentales. Propuestas que como ya se sabe llevan a fragmentación y empobrecimiento de nuestros pueblos y sociedades. La desarticulación de la clase trabajadora, el aumento de la desocupación, la creciente marginación de amplios sectores de nuestras poblaciones urbanas y rurales son inequívocas consecuencias de la aplicación de estas políticas.

Situación regional que no está separada de las convulsiones que expresan el agotamiento de un orden mundial caracterizado por una globalización unipolar. Al hacer una descripción de esta coyuntura no puede soslayarse que los límites de la globalización capitalista y los cuestionamientos que los mismos generan tienden a expresarse en variantes conservadoras en los países centrales. Vale citar la experiencia



Trump y su “América primero” desempolvando un proteccionismo con el que no solo busca pararse en su disputa con China, sino que golpea fuertemente a la región. Esta experiencia viene acompañada por el “Brexit” y el surgimiento de propuestas neofascistas en Europa.

En este nuevo contexto geopolítico, la crisis de experiencias de integración regional como el ALBA-TCP, el Mercosur, la UNASUR, o la CELAC, deja a nuestros países en una situación de debilidad en el plano de las negociaciones internacionales. Asimismo, el avance de los gobiernos neoliberales de la región en negociaciones como las del Mercosur y la Unión Europea condenan nuestras economías a un vínculo cada vez más desequilibrado con los países más desarrollados, del cual sólo pueden beneficiarse las elites vinculadas a modelo extractivista y al sector financiero.

A los acuerdos de libre comercio, con los que los gobiernos conservadores de nuestra región insisten en un mundo cada vez más proteccionista, se suma el problema agobiante de la deuda externa, del cual nuestras naciones nunca lograron escapar. El endeudamiento y los compromisos externos se constituyen en un candado creado para bloquear cualquier cambio político democrático que nuestros pueblos intenten construir.

En este capitalismo en crisis la ofensiva sobre el trabajo y el planeta que caracterizábamos al comienzo se exagera con el fin de garantizar una mayor tasa de ganancia para el capital. De tal forma, cada vez son más escuchados los llamados a mejorar la productividad que no son otra cosa que una búsqueda por aumentar la plusvalía relativa y disminuir los costos laborales mediante mayor precarización laboral.

Esta política no hace más que profundizar las condiciones de postergación de nuestra región. En efecto la OIT prevé en su panorama laboral que la desocupación en América Latina y el Caribe aumente por tercer año consecutivo. La salida de las disputas entre los bloques de poder a nivel mundial no hará más que profundizar las condiciones de debilidad del desarrollo de la región, profundizando una inserción rezagada en la economía global. Según la propia CEPAL “la débil inserción de la región en las cadenas globales de valor se especializa en el suministro de materias primas para las



exportaciones de terceros países”. La reprimarización de nuestras economías no hace más que profundizar las condiciones de desigualdad y postergación que se viven en nuestros países.

Además del aumento de la desocupación y la falta de creación de nuevos puestos de trabajo a la cual nos condena el proceso de reprimarización señalado, desde el sindicalismo advertimos un proceso de precarización creciente de los empleos de los cuales la actividad económica no puede prescindir. Nos referimos al diseño de reformas laborales regresivas, que echan por tierra derechos adquiridos a lo largo de décadas de luchas y que pretenden reconfigurar la relación laboral entre patrones y trabajadores. En la nueva hegemonía neoliberal se estimula el trabajo “independiente” o “emprendedor” como mecanismo para encubrir la relación laboral de dependencia. Se trata de un proceso de deslaboralización del trabajo bajo nuevas estrategias jurídicas, con fuerte sustento propagandístico e ideológico.

Se apunta a legalizar formas de trabajo que hoy resultan fraudulentas, y se promueve lo que se ha dado en llamar “formas atípicas de empleo” para sortear nuestros derechos laborales básicos, como son la sindicalización, la huelga y la negociación colectiva. Uno de los mecanismos que vemos para conseguir esos fines es la tercerización laboral, que en definitiva apunta a replantear la relación de trabajo como una relación de cliente – proveedor y a eliminar toda responsabilidad del patrón para con el trabajador. Desde la CLATE rechazamos estas estrategias patronales y asumimos el desafío de prepararnos para enfrentar el futuro del trabajo que queremos. Esto nos exige un mayor conocimiento para reforzar nuestra capacidad de intervención, desafío que asumimos con el refuerzo de nuestras actividades de formación e investigación.

Retomando el tema de la inserción de nuestra región en el mundo hay que señalar que la misma exacerba una competencia a la baja entre nuestros países. Competencia que enarbola un conocido discurso: los costos laborales altos y los Estados hipertrofiados y caros impiden atraer las inversiones que impulsarían el desarrollo de nuestros países. Como correlato de estas afirmaciones se avanza en desarmar las capacidades de intervención estatales, se avanza en una nueva ola privatizadora y se



busca mercantilizar lo que deben ser derechos y se busca avanzar en la denominada baja de los costos laborales, que no es más que mantener bajos salarios y desarmar la seguridad social.

Asistimos de tal forma a una limitación de la capacidad de intervención estatal virtuosa en la economía que mediante el gasto público puede impulsar el crecimiento de la renta nacional. Siendo al mismo tiempo sistemática la desestructuración de las capacidades productivas y reguladoras en beneficio de los grandes grupos económicos, generalmente transnacionalizados, traduciéndose en una pérdida de soberanía de nuestros países. Debe recuperarse la capacidad productiva estatal y también utilizar su poder de compra para estimular la producción y el empleo nacional.

Existe una pérdida de soberanía y una radicalización reaccionaria en muchos de nuestros países, que resulta funcional a un nuevo avance imperialista en la región. Avance que no solo se verifica desde una perspectiva estructural de EE. UU para fortalecer su intervención en el plano económico, a través de negociaciones bilaterales asimétricas donde hace valer su poderío. La potencia del norte ha decidido también reforzar su histórica política injerencista respecto a América Latina y el Caribe. Bajo argumentos falaces como la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, o la defensa del orden democrático interno de nuestras naciones. Así es como EE.UU. mantiene viejas medidas, e impulsa nuevas acciones, contra la soberanía nuestros pueblos.

Desde La Habana, la CLATE repudia el criminal bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace más de 60 años mantienen los EE.UU. sobre Cuba, una rémora de la Guerra Fría. Una política que se ve actualizada en el acoso y la agresión permanente que recibe la República Bolivariana de Venezuela, donde la excusa de la defensa del orden democrático se utiliza para intervenir en sus asuntos internos, lo que ocasiona desestabilización y grandes males para el pueblo, situación que también rechazamos. Denunciamos a su vez la doble moral que esto representa, la cual queda expuesta ante la indiferencia que existe frente a la situación que atraviesa Honduras, donde se vulneran los principios democráticos y el Estado de derecho sin condena internacional alguna.



En ese sentido, suscribimos la resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) que condena las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea (UE) contra Venezuela, conforme una propuesta del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

Asimismo, rechazamos el asesoramiento que los EE.UU. brindan a los gobiernos conservadores latinoamericanos en sus políticas de seguridad, alentando la injerencia cada vez mayor de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior y la militarización de las policías locales, cuyo objetivo principal, lejos de combatir el crimen organizado, es reprimir a la población pobre y al activismo político que impugna el orden económico social. El asesinato Marielle Franco en Río de Janeiro y fusilamiento del joven mapuche Rafael Nahuel en la ciudad argentina de Bariloche son apenas una muestra de la amenaza que representa esta política represiva. Los poderes judiciales abonan este terreno represivo haciendo lugar a la criminalización de la protesta social.

El avance represivo que advertimos y denunciemos no sirve a otro fin que al del ajuste neoliberal que señalábamos al comienzo. Como trabajadoras y trabajadores del Estado de sobra sabemos que la desarticulación de las capacidades de intervención y regulación estatal y la mercantilización de los servicios públicos va acompañada de la precarización de las políticas públicas destinadas a garantizar derechos, las cuales son sumamente necesarias para los sectores más vulnerables de nuestras sociedades. No nos caben dudas que a políticas precarias corresponden trabajadores precarizados.

De sobra sabemos que los ajustes y recortes fiscales afectan nuestras condiciones de trabajo, así las terciarizaciones, los contratos informales y los despidos y el desmantelamiento de áreas estatales completas son parte de las políticas que nos propone esta nueva etapa nos atacan cotidianamente. Pero también tenemos en claro que estas políticas de reducción del Estado se traducen en peores condiciones de vida para el conjunto de nuestras poblaciones, en especial aquellos más postergados. Los trabajadores del sector público insistimos en que nuestro trabajo garantiza los derechos de nuestros pueblos. En tal sentido debemos estar dispuestos a articular nuestras luchas en defensa de nuestros lugares y condiciones de trabajo con otras organizaciones de



trabajadores y trabajadoras, con distintos movimientos sociales, para enfrentar de conjunto estas políticas que más allá que busquen maquillarse con un discurso modernizador son claramente neoliberales.

Sabemos que a las crisis económicas se las enfrenta con políticas muy distintas a las que nos proponen. El desarrollo productivo que industrialice nuestras economías y nos permita transformar la matriz extractivista y con ello se abrirán otras posibilidades de inserción no subordinada a escala mundial no se conseguirá aplicando políticas de austeridad que solo profundizan los ciclos recesivos. Garantizar el acceso a prestaciones de salud pública de calidad, a la educación pública y políticas amplias de seguridad social no generan déficit sino que garantizan las condiciones de reproducción de la sociedad dignas para todos y no solo para aquellos que puedan pagarlos. En ese marco se potencia la capacidad de lucha por nuestras condiciones laborales como trabajadores y trabajadoras estatales.

En el mismo sentido defendemos, con la misma energía que luchamos por nuestros derechos laborales y nuestras condiciones de trabajo, nuestros sistemas previsionales y alertamos sobre el intento de convertirlos en instrumentos de acumulación del capital financiero. Sólo con jubilaciones y pensiones justas, eliminando los sistemas mixtos y privados, y mediante un sistema público, estatal y solidario, podremos garantizar una vejez digna para todos los trabajadores y trabajadoras.

Por todo lo anterior, desde CLATE asumimos la responsabilidad de enfrentar este intento de restauración conservadora en muchos de nuestros países, actitud que sólo será posible si se avanza en condiciones de una verdadera integración regional. Integración que lejos está de las propuestas de libre comercio y tratados bilaterales que nos vuelven a proponer, sino que se sitúa precisamente en sus antípodas. Entendemos una verdadera integración que desarrolle las potencialidades de nuestros países y profundice la complementariedad y no la competencia. Aspiramos a una integración profundamente antiimperialista y anticapitalista.

Los trabajadores y trabajadoras de América Latina nos comprometemos asimismo a defender la institucionalidad democrática de nuestros países, frente al



intento de los grupos de poder de manipular la voluntad popular mediante operaciones mediáticas, judiciales o pronunciamientos militares. Con independencia de los posicionamientos que cada organización miembro defina en cada uno de nuestros países, desde la CLATE rechazamos cualquier intento de alterar la voluntad popular mediante proscipciones, encarcelamientos y desafueros sin condena judicial previa, así como todo tipo de persecuciones políticas.

Ratificamos asimismo nuestra defensa de los Derechos Humanos y condenamos cualquier intento de garantizar impunidad a quienes los vulneraron. En ese sentido repudiamos el indulto a Alberto Fujimori en Perú y el intento de liberar mediante prisión domiciliaria a los condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina. Del mismo modo reclamamos celeridad en los juicios por genocidio, para evitar que criminales como José Efraín Ríos Montt mueran sin condena y sus víctimas queden sin acceso a la justicia. Sólo las políticas de memoria, verdad y justicia son la garantía de no repetición de los crímenes del pasado.

Respecto a la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, existe la amenaza de algunos candidatos de hacer trizas las negociaciones alcanzadas al llegar a la presidencia. En la misma línea, el actual presidente, Juan Manuel Santos, incumplió el compromiso con los trabajadores respecto de la reparación colectiva al movimiento sindical. Desde la CLATE hacemos un llamado a respetar el Acuerdo de Paz y garantizar los compromisos allí asumidos, para dar lugar a la paz duradera y efectiva que reclaman todos los colombianos.

Nuestra defensa a los derechos humanos también se reafirma en los problemas del presente. Defendemos por ello las consignas que el movimiento de mujeres ha hecho sentir a nivel regional y mundial, en su lucha por igualdad de derechos en material laboral y de integración equitativa en cada ámbito de representación sindical, político o comunitario. Del mismo modo expresamos nuestro rechazo a la violencia machista y la necesidad de políticas públicas para prevenirla y erradicarla, que cuenten con su debido financiamiento. Necesitamos políticas orientadas a erradicar la violencia contra las mujeres en el trabajo y también medidas de protección hacia las trabajadoras



migrantes. Asimismo, alentamos un debate serio, respetuoso y maduro sobre el aborto legal que permita asumir este tema como un asunto de salud pública.

El derecho a un ambiente sano, a la defensa de nuestro bienes comunes, a la soberanía alimentaria y el acceso al agua se inscriben en la línea de derechos fundamentales de los pueblos, que la CLATE defiende en el contexto de un sistema productivo mundial devastador y expoliador.

Por último, no escapa a la realidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestra región el problema de las migraciones y el trato que reciben los migrantes en cada uno de los países de acogida. Nos expresamos contra los muros y las políticas estigmatizantes sobre los migrantes y defendemos su derecho a migrar, a recibir un trato humano y ser reconocidos por el aporte que brindan en la sociedad que los recibe.

Como CLATE reafirmamos el compromiso con los postulados que nos dieron origen hace ya cincuenta años que nos permiten demostrar que es posible construir grados cada vez mayores de unidad e integración rompiendo con esquemas de división más allá de nuestra diversidad.